

JUSTICIA INTERNACIONAL DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA

Durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 miles de personas fueron secuestradas, asesinadas, y desaparecidas. Muchos recién nacidos fueron objeto de apropiación cuando sus madres eran detenidas ilegalmente. Se estima que durante el régimen desaparecieron entre 20.000 y 30.000 personas, aunque la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) señaló con precisión la cifra de 8.961 desaparecidos. Otros fueron arrojados al mar desde aviones tras ser engañados y narcotizados, en lo que se han llamado los “vuelos de la muerte”. La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue uno de los principales centros donde se secuestró y asesinó a miles de personas.

Maestros y sindicalistas, entre otros, fueron colectivos sistemáticamente represaliados por su oposición ideológica al régimen dictatorial.

En 1986 y 1987 fueron dictadas las leyes de obediencia debida y punto final, que suponían una amnistía para todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que habían participado en la lucha antisubversiva cometiendo crímenes contra la humanidad, como terrorismo y torturas, excluyéndose los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles.

Posteriormente, el 6 de marzo de 2001, se revocaron estas leyes y la Corte Suprema de Justicia las consideró inconstitucionales el 14 de junio de 2005, lo que permitió la investigación y el juzgamiento en Argentina de numerosos casos de violaciones de Derechos Humanos.

Otros familiares y víctimas acudieron a los tribunales españoles en demanda de justicia, a la que se fueron sumando organizaciones españolas de Derechos Humanos. Como resultado, la Audiencia Nacional declaró la competencia de la jurisdicción española sobre supuestos delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en junio de 1996, que fue ratificada por el Tribunal Supremo.

Acusado Adolfo Scilingo. El 19 de abril de 2005 la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional dictó la sentencia por la que se condena al acusado Adolfo Francisco Scilingo, como autor responsable de un delito de lesa humanidad con resultado de 30 asesinatos por su participación en los “vuelos de la muerte”, una detención ilegal y una tortura grave. La Audiencia consideraba probado que durante la dictadura se llevó a cabo un plan de exterminio contra los considerados "subversivos". La Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Asociación Libre de Abogados, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plazo de Mayo e Iniciativa per Catalunya, además del acusado, recurrieron la sentencia solicitando la calificación por delito de genocidio y la condena por todos los hechos en los que participó por omisión. El Tribunal Supremo, en julio de 2007, ha elevado la pena de 640 a 1.084 años por la complicidad del ex militar argentino en 255 detenciones ilegales, pero no le consideró autor de los demás crímenes y secuestros cometidos en el ESMA al no tener una participación activa en los mismos ni responsabilidades que le exigieran intervenir como garante. Asimismo fue absuelto del delito de tortura al no encuadrarse en los

supuestos del artículo 607 del Código Penal, y no se aplicó el tipo de genocidio al considerar el tipo de lesa humanidad más adecuado a las situaciones del caso concreto.

Adolfo Scilingo se desempeñaba en el momento de los hechos como jefe de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Después de confesar en televisión su participación en los denominados "vuelos de la muerte", Scilingo admitió su participación en estos hechos ante el juez Baltasar Garzón cuando llegó a España en 1997 pero después lo negó en el juicio.

Acusado Ricardo Cavallo. Cavallo fue detenido en México el 24 de agosto de 2000, tras la petición de extradición del tribunal español para ser juzgado por terrorismo y genocidio. En noviembre de 2005 la Audiencia Nacional española suspendió la tramitación de la causa mientras no se cumplimentara la Comisión Rogatoria que se había solicitado a los tribunales argentinos con el fin de verificar si los hechos por los que se acusaba a Cavallo estaban siendo objeto de investigación por la justicia argentina.

En diciembre de 2006, habiéndose finalizado la instrucción y acordado la apertura del juicio oral, la Audiencia Nacional española acordó, a petición de la defensa, declinar su jurisdicción a favor de los tribunales argentinos, decisión que fue recurrida por las acusaciones. El Tribunal Supremo resolvió en agosto de 2007 el recurso a favor de las acusaciones y el fiscal, entendiéndose que la actuación de declinatoria de jurisdicción de la Audiencia Nacional a favor de los tribunales argentinos no procedía puesto que ya se había determinado que los tribunales españoles eran los competentes para juzgar los hechos.

En estos momentos está pendiente de inicio el juicio oral.

El ex militar fue capitán de corbeta en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar. Dirigía en México el Registro Nacional de Vehículos. Testimonio de personas reclusas en la escuela dan cuenta de delitos de torturas practicadas por Cavallo.

[Ver resoluciones judiciales](#)